

Argumentos para todas las etapas

No hay déficit de plazas públicas que lo justifique.

Los datos oficiales cifran en unas 2.500 las plazas disponibles en el Bachillerato público en Aragón, con más de 700 vacantes solo en Zaragoza. Por tanto, destinar fondos a crear plazas concertadas no responde a una necesidad de escolarización sino a una decisión política.

Desvío de recursos públicos limitados hacia la red privada.

La medida costará unos 19 millones de euros anuales. Este dinero se detrae de los fondos destinados a la Educación Pública que trabaja infrafinanciada, con instalaciones desfasadas (en algunos casos con denuncias a PRL por el mal estado y riesgo evidente de las mismas) que precisan modernización y adaptación a las nuevas demandas y retos educativos.

Es una decisión de origen electoral, no técnico.

La propia consejera lo admite: "Es una promesa electoral y va en el programa electoral del partido". Argumentar que destinar dinero para financiar etapas no obligatorias responde a elementos electorales careciendo de criterios técnicos supone despilfarro de dinero público.

Rechazo al Bachillerato concertado

Rompe la igualdad de oportunidades en la etapa más "selectiva".

Bachillerato es la etapa bisagra hacia estudios superiores; concertarla mantiene la segregación socioeconómica en el tramo con más impacto en el futuro académico y laboral del alumnado.

Rechazo a la concertación del primer ciclo de Infantil 0-3 años

Precarización del cuidado infantil temprano.

En esta franja de edad (0-3 años) se trata de cuidado y desarrollo infantil temprano, no de rendimiento académico. Concertar esta etapa con centros privados puede introducir criterios de rentabilidad económica en un servicio que requiere ratios estrictas de personal por menor, formación específica de maestras y técnicos y alta calidad asistencial, sin garantías de que el concierto imponga las mismas condiciones que en la red pública precarizando la conciliación familiar.

Rechazo a la FP concertada

Fragmentación territorial y desigualdad de acceso.

La FP pública cumple una función de vertebración del territorio, manteniendo población y presentando una oferta formativa accesible a comarcas menos pobladas, a diferencia de la oferta concertada/privada, orientada al negocio y a sectores rentables. La oferta privada de FP se concentra en Zaragoza y grandes núcleos urbanos, agravando la brecha rural-urbana en el acceso a formación con salida laboral directa.